

como consecuencia que se deje insubsistente la sentencia que se funda en ella y se emita otra en la cual no se aplique el precepto legal considerado inconstitucional, y si su aplicación se realizó en el acto originalmente impugnado ante la autoridad que emitió la sentencia, el efecto será dejar insubsistente ese acto, para que se emita uno nuevo apegado a lo sostenido en la ejecutoria de amparo. En cambio, la declaración de inconstitucionalidad de una ley en el amparo indirecto tiene como efecto dejar insubsistente el acto de aplicación y que en el futuro no se pueda volver a aplicar al peticionario de garantías hasta que se reforme."

Ante la conclusión alcanzada, resulta innecesario el estudio de los restantes conceptos de violación hechos valer por la quejosa, pues en nada cambiaría la conclusión alcanzada.

Sexto. Efectos de la concesión del amparo. En términos de lo establecido en el párrafo tercero del artículo 77 de la Ley de Amparo, procede determinar los efectos de la concesión de la siguiente manera:

a) La autoridad responsable Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública, residente en San Luis Potosí, no aplique en el presente y en lo futuro a la parte quejosa María Leonides Secaída Lopez, el artículo tildado de inconstitucional;

b) Como consecuencia, deberá dejar insubsistente la resolución de veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, únicamente por lo que se refiere a la aquí quejosa María Leonides Secaída López y, tomando en consideración que este Juzgado Federal arribó a la conclusión que el artículo 116 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, vigente al inicio del procedimiento relativo (dos mil dieciséis) es inconstitucional, emita otra en la que determine que el procedimiento para la imposición de sanciones CEGAIP-PISA-091/2016-1 instaurado en contra de la impetrante, es improcedente.

Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se

RESUELVE:

Único. La Justicia de la Unión ampara y protege a **María Leonides Secaída López**, respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables, precisados en el considerando segundo y señaladas en el punto de consideración tercero, por las razones expuestas en el considerando quinto y para los efectos descritos en el último considerando de esta sentencia.

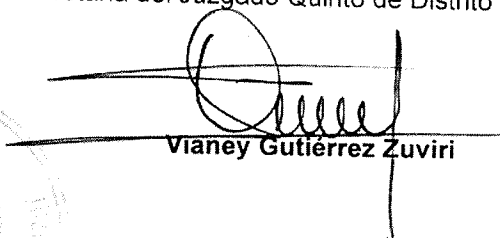
Notifíquese; hágase personalmente.

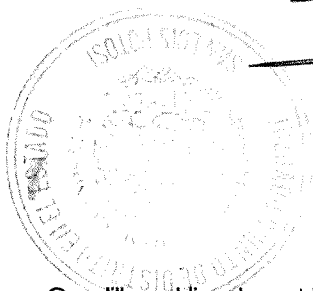
Así lo resolvió y firma **David Macario González Quiroz**, Juez Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, hoy treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, en que lo permitieron las labores del juzgado; asistido de la Secretaria **Vianey Gutiérrez Zuviri**, quien autoriza y da fe.

Lo que comunico a Usted, para los efectos legales a que hubiere lugar.

Ciudad Valles, San Luis Potosí, **treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho.**

La Secretaria del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado.


Vianey Gutiérrez Zuviri



En este sentido, en cumplimiento a la sentencia dictada dentro del Juicio de Amparo número 265/2018-I-A, se declara improcedente el presente procedimiento para la imposición de sanciones para **MARÍA LEONIDES SECAIDA LÓPEZ, en su carácter de PRESIDENTE MUNICIPAL DE ALAQUINES, SAN LUIS POTOSÍ.**

TERCERO. En lo respectivo al **C. SIRIACO CARREÓN RUCOBA en su carácter de EX PRESIDENTE MUNICIPAL del H. AYUNTAMIENTO DE ALAQUINES, SAN LUIS POTOSÍ,** es menester precisar que la resolución de fecha 23 veintitrés de mayo de 2018 dos mil dieciocho queda intocada, y por tanto, previo a emitir un pronunciamiento de fondo en el procedimiento que nos ocupa, esta Comisión estima pertinente citar la tesis de jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación bajo el número de Tesis: P./J. 99/2006, la cual se encuentra publicada en el Semanario Judicial de la Federación y señala:

“DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SUS PROPIOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES ES VÁLIDO ACUDIR DE MANERA PRUDENTE A LAS TÉCNICAS GARANTISTAS DEL DERECHO PENAL, EN TANTO AMBOS SON MANIFESTACIONES DE LA POTESTAD PUNITIVA DEL ESTADO.

De un análisis integral del régimen de infracciones administrativas, se desprende que el derecho administrativo sancionador posee como objetivo garantizar a la colectividad en general, el desarrollo correcto y normal de las funciones reguladas por las leyes administrativas, utilizando el poder de policía para lograr los objetivos en ellas trazados. En este orden de ideas, la sanción administrativa guarda una similitud fundamental con las penas, toda vez que ambas tienen lugar como reacción frente a lo antijurídico; en uno y otro supuesto la conducta humana es ordenada o prohibida. En consecuencia, tanto el derecho penal como el derecho administrativo sancionador resultan ser dos inequívocas manifestaciones de la potestad punitiva del Estado, entendida como la facultad que tiene éste de imponer penas y medidas de seguridad ante la comisión de ilícitos. Ahora bien, dada la similitud y la unidad de la potestad punitiva, en la interpretación constitucional de los principios del derecho administrativo sancionador puede acudirse a los principios penales sustantivos, aun cuando la traslación de los mismos en cuanto a grados de exigencia no pueda hacerse de forma automática, porque la aplicación de dichas garantías al procedimiento administrativo sólo es posible en la medida en que resulten compatibles con su naturaleza. Desde luego, el desarrollo jurisprudencial de estos principios en el campo administrativo sancionador -apoyado en el Derecho Público

Estatutal y asimiladas algunas de las garantías del derecho penal- irá formando los principios sancionadores propios para este campo de la potestad punitiva del Estado, sin embargo, en tanto esto sucede, es válido tomar de manera prudente las técnicas garantistas del derecho penal."

Anotado lo anterior, se procede analizar el artículo 109 fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, toda vez que mediante acuerdo emitido el 07 siete de abril de 2016 dos mil dieciséis dentro del presente expediente, se inició un Procedimiento Administrativo de Imposición de Sanciones al **C. SIRIACO CARREÓN RUCOBA en su carácter de EX PRESIDENTE MUNICIPAL del H. AYUNTAMIENTO DE ALAQUINES, SAN LUIS POTOSÍ**, pues se estima que desplegó la conducta contenida en el artículo 109 fracción IV, para lo que resulta necesario desglosar los elementos de la infracción, sirve de fundamento lo dispuesto por la tesis de jurisprudencia Tesis: P./J. 100/2006, la cual se cita:

"TIPICIDAD. EL PRINCIPIO RELATIVO, NORMALMENTE REFERIDO A LA MATERIA PENAL, ES APLICABLE A LAS INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS.

El principio de tipicidad, que junto con el de reserva de ley integran el núcleo duro del principio de legalidad en materia de sanciones, se manifiesta como una exigencia de predeterminación normativa clara y precisa de las conductas ilícitas y de las sanciones correspondientes. En otras palabras, dicho principio se cumple cuando consta en la norma una predeterminación inteligible de la infracción y de la sanción; supone en todo caso la presencia de una lex certa que permita predecir con suficiente grado de seguridad las conductas infractoras y las sanciones. En este orden de ideas, debe afirmarse que la descripción legislativa de las conductas ilícitas debe gozar de tal claridad y univocidad que el juzgador pueda conocer su alcance y significado al realizar el proceso mental de adecuación típica, sin necesidad de recurrir a complementaciones legales que superen la interpretación y que lo llevarían al terreno de la creación legal para suplir las imprecisiones de la norma. Ahora bien, toda vez que el derecho administrativo sancionador y el derecho penal son manifestaciones de la potestad punitiva del Estado y dada la unidad de ésta, en la interpretación constitucional de los principios del derecho administrativo sancionador debe acudir al aducido principio de tipicidad, normalmente referido a la materia penal, haciéndolo extensivo a las infracciones y sanciones administrativas, de modo tal que si cierta disposición administrativa establece una sanción por alguna infracción, la conducta realizada por el afectado debe encuadrar exactamente en

la hipótesis normativa previamente establecida, sin que sea lícito ampliar ésta por analogía o por mayoría de razón."

Asentado lo anterior, en primer lugar se estudian los elementos de la infracción contenida en la fracción IV del artículo 109 de la abrogada Ley de Transparencia del Estado.

Bien, en el título octavo, capítulo I, llamado "De las Infracciones y Sanciones" se encuentra la fracción y artículo mencionado en líneas anteriores y que literalmente establecen:

"ARTICULO 109. Al sujeto obligado, que:

[...]

IV. No cumpla de manera expedita las resoluciones de la CEGAIP, para liberar información en los términos y condiciones que establece esta Ley, será sancionado con multa de quinientos a mil días de salario mínimo vigente en el Estado";

De la fracción en cita, tenemos que los elementos a estudio son:

PRIMER ELEMENTO: El sujeto obligado no cumpla de manera expedita las resoluciones dictadas por la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información.

SEGUNDO ELEMENTO: La resolución ordene al sujeto obligado liberar información en los términos y condiciones que establece la ley.

En cuanto al primer elemento, éste se acredita en tenor de lo siguiente:

En estudio del primer elemento, cabe señalar que el mismo se actualiza cuando esta Comisión dicta una resolución y el sujeto obligado es omiso en dar cumplimiento en el término concedido para tal efecto, por lo que resulta pertinente traer a colación el contenido del acuerdo número CEGAIP-25/2015.S.E. de fecha 15 quince de enero de 2016 dos mil dieciséis que se transcribe a continuación:

"Derivado de que desde el día 31 de octubre de 2014 la administración del sistema infomex ha quedado en manos de esta Comisión en coordinación con el Instituto

Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) y tomando en consideración que existen varios antecedentes por los cuales, diversos entes obligados manifestaron su voluntad para adherirse al sistema infomex y toda vez que el artículo 69 de la Ley de Transparencia establece la utilización de formatos y mecanismos de transmisión de datos, a través de los medios electrónicos disponibles, como es el caso de dicho sistema infomex, se estableció en el artículo DÉCIMO Transitorio del Decreto Legislativo 234 de dicha norma jurídica, que las entidades públicas harán utilización de dichos medios a más tardar dos años de la entrada en vigor y los Municipios con población inferior a 70,000 habitantes lo harán después de cuatro años a partir de la entrada en vigor de dicho Decreto, habiendo fenecido en exceso ambos plazos, y en cumplimiento a lo dispuesto por la cláusula séptima inciso f establecida en el Convenio General de Colaboración para Establecer las Bases de Coordinación que permitan el desarrollo y la expansión del derecho de acceso a la información en el Estado de San Luis Potosí, a través, entre otras actividades, de la implementación del Sistema Electrónico de Solicitudes de Acceso a la Información Pública denominado SISTEMA INFOMEX, mismo que fue firmado por el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial, todos del Estado, así como esta Comisión, por lo que el Pleno de **esta Comisión con número de acuerdo CEGAIP-25/2015.S.E. conmina a todos los entes obligados que a la fecha no se encuentren adheridos al sistema infomex, para que, en un término improrrogable de 60 días naturales, contados a partir del día siguiente, en que les sea notificado el presente acuerdo de Pleno, realicen los trámites administrativos y legales que correspondan para estar en posibilidad de firmar el convenio de colaboración correspondiente para la utilización del sistema infomex.**

En consecuencia, se instruye a la C. Ana María Valle Le Vinsón en su carácter de Titular de la Unidad de Información de esta Comisión para realizar las gestiones correspondientes para dar seguimiento al cumplimiento del presente acuerdo.

Igualmente se instruye al Director Jurídico a efecto de que realice un convenio marco para la adhesión al sistema infomex y sea remitido al Pleno para su debida aprobación.

Igualmente, se instruye a la Directora de Comunicación Social de este Órgano Colegiado para que realice las gestiones necesarias para la elaboración de boletín de prensa." (Énfasis añadido de manera intencional).

Como se puede observar, según consta en el referido acuerdo, se les concedió a todos los sujetos obligados que no se encontraban adheridos al sistema Infomex, el término de 60 sesenta días naturales improrrogables, contados a partir del día siguiente en que les fuera notificado el acuerdo, para que realizaran los trámites administrativos y legales necesarios para firmar el convenio de colaboración para la utilización de este sistema electrónico.

Dicho acuerdo fue notificado vía correo electrónico el día 26 veintiséis de enero de 2015 dos mil quince, mediante oficio número CEGAIP-080/2015 signado por la entonces Comisionada Presidenta de este organismo, al entonces Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Alaquines, a través del correo institucional de la Unidad de Información de esta Comisión, como se puede corroborar en la constancia visible a foja 32 treinta y dos de autos, y notificado de manera personal el 05 cinco de febrero de 2015 dos mil quince en la Unidad de Información del Ayuntamiento, como se advierte de la firma autógrafa que consta a foja 31 treinta y uno de autos.

En este sentido, si el sujeto obligado fue notificado de dicho acuerdo el día 05 cinco de febrero de 2015 dos mil quince, el plazo de los sesenta días naturales concedido para que se realizaran los trámites administrativos y legales necesarios para firmar el convenio de colaboración para la utilización del sistema Infomex, comenzó a transcurrir a partir del día siguiente en que se realizó la notificación, es decir, el **06 seis de febrero del mismo año**, esto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, supletorio a la Ley de Transparencia aplicable al trámite de este procedimiento, y **feneció el 06 seis de abril de 2015 dos mil quince**.

Ahora, en el caso, no consta en autos que dentro del plazo anterior, el entonces Presidente Municipal se hubiera adherido al Sistema Infomex, además de que tampoco compareció en el presente asunto para acreditar haber realizado las gestiones correspondientes para tal efecto y dar cumplimiento al acuerdo CEGAIP-025/2015.S.E.

Bajo este contexto, se colige que el sujeto obligado, esto es, el ex Presidente Municipal de Alaquines, incumplió el acuerdo de pleno CEGAIP-25/2015.S.E., en el

que se le constriñó a realizar los trámites administrativos y legales que correspondieran para que estuviera en posibilidad de firmar el convenio de colaboración para la utilización del sistema Infomex, lo que le correspondía llevar a cabo al sujeto obligado como Titular de la entidad pública, puesto que toda vez que en el plazo en el que se tuvo que haber dado cumplimiento al multicitado acuerdo, el **C. SIRIACO CARREÓN RUCOBA** fungía como Presidente Municipal del Ayuntamiento de Alaquines éste era el responsable de acatar lo ordenado por el Pleno de esta Comisión, ya que de conformidad con lo establecido en el artículo 70, fracciones I y IV de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, que literalmente señala:

"ARTICULO 70. El Presidente Municipal es el ejecutivo de las determinaciones del Ayuntamiento; tendrá las siguientes facultades y obligaciones:

I. Cumplir y hacer cumplir la Ley Orgánica del Municipio Libre, el Bando de Policía y Gobierno, los reglamentos y demás ordenamientos del Municipio, y las resoluciones del Cabildo que estén apegadas a derecho;

[...]

IV. Celebrar a nombre del Ayuntamiento y por acuerdo de éste, los actos y contratos necesarios para el despacho de los negocios administrativos y la atención de los servicios públicos municipales, salvo los convenios cuya celebración corresponde directamente al ayuntamiento en los términos de esta ley. Además, establecer las medidas financieras, legales y operativas necesarias que apoyen y garanticen la independencia técnica de la Contraloría Interna."

Del numeral citado, se desprende que le corresponde al Presidente Municipal cumplir, y hacer cumplir dicho ordenamiento, el Bando de Policía y Gobierno, los reglamentos y demás ordenamientos municipales, así como la suscripción de los actos y contratos necesarios para el despacho de los negocios administrativos, de lo que se tiene que la suscripción del instrumento jurídico necesario para la adhesión del Ayuntamiento al Sistema Infomex estaba a cargo del **C. SIRIACO CARREÓN RUCOBA** en su carácter de Presidente Municipal del Ayuntamiento de Alaquines.

En este tenor, en la especie se acredita que el **C. SIRIACO CARREÓN RUCOBA** en su carácter de **EX PRESIDENTE MUNICIPAL** del **H. AYUNTAMIENTO DE ALAQUINES**,

SAN LUIS POTOSÍ, fue omiso en dar cumplimiento al acuerdo de Pleno número CEGAIP-25/2015.S.E., al no suscribir el convenio correspondiente para la adhesión de la entidad pública al Sistema Infomex.

Anotado lo anterior, resulta pertinente estudiar el segundo elemento de la infracción el cual consiste en:

“La resolución ordene al sujeto obligado liberar información en los términos y condiciones que establece la ley”.

Bien, el mismo se encuentra acreditado en virtud de las siguientes consideraciones:

El Sistema Infomex es la herramienta tecnológica que permite que cualquier persona pueda realizar solicitudes de acceso a la información pública gubernamental en los términos establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, por lo que se colige que la finalidad de dicho sistema es la de permitir mecanismos que faciliten y garanticen el acceso a la información bajo el marco de la Ley.

Ahora bien, la abrogada Ley de la materia, dispone en su artículo 69 y décimo transitorio lo siguiente:

“ARTÍCULO 69. En todo caso, las personas que así lo prefieran, podrán enviar su solicitud de información pública, utilizando los formatos y mecanismos de transmisión de datos que, a través de los medios electrónicos disponibles, implementen las entidades públicas. Dichos formatos deberán cumplir con las previsiones que se establecen en el artículo anterior.

Las entidades públicas deberán adoptar todas aquellas medidas que revistan de certeza, el envío y recepción, tanto de las solicitudes, como de las respuestas que, en su caso, les recaigan, a través de medios electrónicos.”

“DÉCIMO. La información pública de oficio, a que se refiere los artículos 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, deberá publicarse dentro de los ciento veinte días naturales siguientes a la entrada en vigor de esta Ley. Las entidades públicas obligadas deberán contar con sistemas electrónicos, para que cualquier persona pueda hacer

uso remoto de los mecanismos de acceso a la información, y de los procedimientos de revisión a los que se refiere este Decreto, a más tardar en dos años a partir de su entrada en vigor. Tratándose de municipios con población inferior a setenta mil habitantes, el plazo para contar con los sistemas electrónicos respectivos, será de cuatro años a partir de la entrada en vigor del presente Decreto." (Énfasis añadido de manera intencional).

De lo anterior, resulta evidente que conforme a lo dispuesto en la Ley, los sujetos obligados deben utilizar mecanismos de transmisión de datos que, a través de los medios electrónicos disponibles, permitan hacer uso del ejercicio de acceso a la información, esto es, solicitar y obtener información; por tanto, es dable asentar que la resolución del Pleno que los servidores públicos fueron omisos en cumplir, tenía como finalidad que la entidad pública a la que pertenecen, es decir, el Ayuntamiento de Alaquines, se adhiriera al sistema Infomex y contara con los medios necesarios para que a través de éste, se liberara la información que les fuera solicitada.

Así las cosas, en el presente caso se advierte que se acredita fehacientemente la hipótesis establecida en el artículo 109 fracción IV de la Ley de Transparencia del Estado, por parte del **C. SIRIACO CARREÓN RUCOBA en su carácter de EX PRESIDENTE MUNICIPAL del H. AYUNTAMIENTO DE ALAQUINES, SAN LUIS POTOSÍ**, ya que es su responsabilidad cumplir las obligaciones contenidas en las leyes, reglamentos y decretos que le sean aplicables, por lo tanto, está obligado a respetar y aplicar lo contenido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que lo sujeta a las facultades y obligaciones que devienen ésta.

En este tenor, al comprobarse que su actuación no fue apegada a la Ley de Transparencia del Estado, en el sentido de dar cabal cumplimiento en su carácter de servidor público a las obligaciones en materia de transparencia, en el caso en concreto, al no acatar el acuerdo emitido por el Pleno de esta Comisión en los términos dictados en éste, resulta sujeto obligado de conformidad con lo dispuesto por los artículos 14 y 15 de la Ley de la materia, y por lo tanto, acreedor a una sanción administrativa al actualizarse la hipótesis contenida en la fracción IV del artículo 109 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública:

“ARTÍCULO 14. Para efectos de la presente Ley, todos los servidores públicos que participen en la formulación, producción, procesamiento, administración, archivo y resguardo de información pública, se consideran entes obligados; por lo tanto, el ejercicio de su función pública deberá someterse al principio de máxima publicidad, y a respetar y facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información, y la acción de protección de datos personales.”

“ARTÍCULO 15. Todos los servidores públicos serán sujetos de responsabilidad por el incumplimiento de las normas legales y reglamentarias, así como con las políticas establecidas con el objeto de formular, producir, procesar, administrar, sistematizar, actualizar, archivar, resguardar y facilitar el acceso a la información pública, inherente al cumplimiento de las funciones constitucionales, legales y reglamentarias de las entidades públicas.”

Por todo lo anterior, este órgano garante procede a determinar el monto de la sanción atento a lo dispuesto por el artículo 115 de la multicitada Ley de Transparencia, y se estima imponer la multa mínima contenida en el artículo 109, fracción IV de la Ley, para lo que sirve de fundamento lo dispuesto por la tesis Aislada del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito que refiere lo siguiente:

“MULTA. CUANDO LA IMPUESTA ES LA MINIMA QUE PREVE LA LEY, LA AUTORIDAD NO ESTA OBLIGADA A MOTIVAR SU MONTO.


Si la multa impuesta con motivo de una infracción es la mínima que prevé la norma aplicable, la autoridad queda eximida de razonar su arbitrio para fijar la cuantificación de la misma.”

Ahora, el artículo 109 de la Ley de la materia, en su fracción IV, refiere lo siguiente respecto de la sanción que se impone a la conducta en éste establecida:

“...será sancionado con multa de quinientos a mil días de salario mínimo vigente en el Estado”.

Consecuentemente, esta Comisión determina imponer al **C. SIRIACO CARREÓN RUCOBA en su carácter de EX PRESIDENTE MUNICIPAL del H.AYUNTAMIENTO DE ALAQUINES, SAN LUIS POTOSÍ**, la sanción correspondiente a 500 quinientos días de salario mínimo vigente en el Estado de San Luis Potosí, y que según lo establecido por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, del 1 uno de abril de 2015 dos mil quince al 30 treinta de septiembre de 2015 dos mil quince, correspondía el Salario Mínimo de \$68.28 (sesenta y ocho pesos 28/100 M.N.), por lo tanto, en virtud de que **la conducta infractora se actualizó el 06 seis de abril de 2015 dos mil quince**, toda vez que es la fecha en que feneció el término de 60 sesenta días naturales contados a partir del día siguiente de la notificación del acuerdo CEGAIP-25/2015.S.E. para que se diera cumplimiento al mismo, corresponde determinar la multa por la cantidad de \$34, 140.00 (treinta y cuatro mil ciento cuarenta pesos 00/100 M.N.).

Lo anterior, con sustento en la tesis de jurisprudencia J020/2004 del Tribunal Electoral del Distrito Federal:



"MULTA. DEBE CUANTIFICARSE CON BASE EN EL SALARIO MÍNIMO GENERAL VIGENTE AL MOMENTO DE LA COMISIÓN DE LA INFRACCIÓN. Si bien es cierto que el artículo 276, párrafo primero, inciso b), del Código Electoral del Distrito Federal establece una sanción consistente en multa de cincuenta a cinco mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, también lo que es dicho numeral no precisa el momento al cual deba referirse tal vigencia, por lo que este Órgano Jurisdiccional estima que el precepto mencionado debe interpretarse en el sentido de que si se sanciona una conducta efectuada en un lugar y tiempo determinados, entonces el salario mínimo que se debe tomar en cuenta para cuantificar la multa respectiva, es precisamente el vigente al momento en que se cometió la infracción. Tal interpretación encuentra sustento en los principios de irretroactividad de la ley y de legalidad consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y siendo que el primero de ellos dispone que a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, de adoptar como criterio que el salario mínimo general aplicable es el vigente al momento de la determinación e imposición de la

sanción, se admitiría una aplicación retroactiva de la ley en perjuicio del partido político infractor, pues se debe tomar en cuenta que dicho salario ha tenido incrementos desde la época en que ocurrieron los hechos materia de las infracciones hasta el momento en que se determinaron las sanciones. Más aún, si se estableciera que el monto de una multa puede fijarse conforme al salario mínimo general vigente al momento de la determinación de la sanción, se violarían en perjuicio del recurrente los principios de certeza y objetividad establecidos en el artículo 3º, párrafo segundo, del Código Electoral local. Ya que el monto de la sanción pecuniaria dependería del momento en el que actuara la autoridad encargada de fijarla, lo que implicaría la inclusión de un elemento diferente al que existía al momento de la comisión de la infracción."

Por lo anteriormente expuesto y fundado, **SE RESUELVE:**

PRIMERO: Se deja insubsistente la resolución de 23 veintitrés de mayo de 2018 dos mil dieciocho, únicamente por lo que se refiere a **María Leonides Secaida López**.

SEGUNDO. Se determina que el presente procedimiento para la imposición de sanciones CEGAIP-PISA-091/2016 instaurado en contra de **María Leonides Secaida López**, es improcedente.

TERCERO. La resolución de fecha 23 veintitrés de mayo de 2018 dos mil dieciocho queda intocada en lo respectivo a la determinación de la multa impuesta a **Siriaco Carreón Rucoba en su carácter de ex Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Alaquines, San Luis Potosí**.

Así lo resolvieron por unanimidad de votos en Sesión Extraordinaria de Consejo el 19 diecinueve de noviembre de 2019 dos mil diecinueve, los Comisionados integrantes de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública,

Maestro Alejandro Lafuente Torres, Licenciada Paulina Sánchez Pérez del Pozo Presidente y Mariajosé González Zarzosa, **siendo ponente el primero de los nombrados**, quienes firman con la Licenciada Rosa María Motilla García, Secretaria de Pleno de este Órgano Garante, quien da fe.

COMISIONADO

MTRO. ALEJANDRO LAFUENTE TORRES

COMISIONADA PRESIDENTE

LIC. PAULINA SÁNCHEZ PÉREZ DEL POZO

COMISIONADA

MARIAJOSÉ GONZÁLEZ ZARZOSA

SECRETARIA DE PLENO

LIC. ROSA MARÍA MOTILLA GARCÍA

